



Presidencia
Uruguay



Ministerio
del Interior

Plan Nacional de Seguridad Pública (2025 - 2035)

MESA INTERSECTORIAL: SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL

Relatoría

30 de setiembre de 2025

1. Introducción

La presente relatoría sistematiza los principales aportes de la primera mesa intersectorial sobre sistema de justicia criminal, en el marco de los Encuentros por Seguridad del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP), realizada el 30 de setiembre de 2025 en Montevideo.

El documento se elaboró a partir de la transcripción del encuentro, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, y fue revisado por la Secretaría Técnica del PNSP. Antes de su publicación, el documento fue validado por los participantes, quienes dispusieron de 48 horas para formular observaciones.

2. Características del evento

Título: Mesa intersectorial sobre sistema de justicia criminal

Fecha: Martes 30 de setiembre de 2025

Hora: 9:00 a 13:00

Lugar: Sala 2B, Edificio Anexo de Torre Ejecutiva (Liniers 1280, Montevideo)

Número de asistentes: 31

Moderación: Emiliano Rojido, coordinador del PNSP

Asistencia técnica: Lucía Pintos, Guzmán Pérez y Sofía Lopes Apesteguy

Instituciones participantes

- Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) – Ministerio del Interior
- Asociación Civil El Abrojo
- Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (ASFAVIDE)
- Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU)
- Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES)
- Colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP)
- Defensoría Pública – Poder Judicial
- Dirección Nacional de Educación (DNE) – Ministerio de Educación y Cultura
- Fiscalía General de la Nación (FGN)
- Fundación Centro de Educación Popular (FCEP)
- Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
- Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) – Ministerio del Interior
- Ministerio del Interior
- OSC Renacer
- Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs)
- Poder Judicial
- Siembra

Consejo Internacional de Observación y Cooperación¹

- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)
- Organización de los Estados Americanos (OEA)
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

3. Desarrollo del Encuentro

3.1 Bienvenida y dinámica de trabajo (9:00 – 9:15)

El moderador comenzó el encuentro destacando algunos datos del “Diagnóstico General de la Criminalidad y la Violencia en Uruguay”, el cronograma de trabajo y los objetivos de la reunión.

3.2 Ronda de presentación (9:15 – 9:30)

Cada participante se identificó, indicando institución representada, nombre y cargo.

3.3 Pregunta disparadora 1 (9:30 – 11:00)

¿Cuáles son los principales desafíos con relación a este tema?
¿Por qué cree que ocurren estos problemas?

Aportes generales:

- **AECA:**

- Señaló que los eslabones de prevención, reparación y resocialización del sistema penal están históricamente abandonados, mientras que todos los gobiernos han reforzado la policía, el proceso judicial y otros elementos punitivos. Esto genera un “embudo”: cada vez entra más gente al sistema y sale menos rehabilitada.
- Indicó que el costo por persona privada de libertad ha disminuido (de 40.000 a 30.000 pesos por mes), y que aún así no hay recursos suficientes para mantener a todas las personas presas.
- Subrayó la necesidad de evitar que más personas ingresen al sistema penitenciario y de enfocar recursos en la rehabilitación, ya que mantener el modelo actual conduce a un fracaso estructural y a la sobrecarga del sistema.
- Destacó que, sin cambios en la prevención y la resocialización, el sistema continuará profundizando la crisis penitenciaria y social.

¹ Las agencias internacionales podrán participar de todos los Encuentros en calidad de observadoras, con un rol no deliberativo, velando por el cumplimiento de las “Reglas del diálogo”.

- **ASFAVIDE:**

- Propuso reducir la población carcelaria mediante un mejor uso de los mecanismos existentes dentro del sistema penal, junto con políticas públicas y coordinación interinstitucional que fortalezcan la rehabilitación y la reinserción social.
- Señaló que no siempre se necesitan recursos económicos, sino voluntad y colaboración entre instituciones, lo cual es fundamental para el éxito de la reinserción.
- Destacó la importancia del trabajo colectivo y coordinado, asegurando que las personas que cumplen condena puedan salir rehabilitadas y reintegrarse a la sociedad, reduciendo la reincidencia.
- Subrayó que experiencias previas demuestran que con recursos humanos y coordinación es posible lograr resultados positivos, aún con limitaciones económicas.
- Recomendó incentivar el trabajo protegido como herramienta de protección social y avanzar hacia una renta básica alimentaria que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas.

- **El Abrojo:**

- Señaló que la hipocresía en la toma de decisiones estatales es uno de los problemas estructurales del sistema penal: el Estado aparece únicamente como respuesta final (punitiva) y no preventiva, especialmente para personas en mayor vulnerabilidad. Subrayó que esto genera un sistema inhumano, y que las instituciones y los políticos deben determinar qué nivel de inhumanidad están dispuestos a tolerar en su trabajo y buscar espacios para debatirlo.
- Destacó la responsabilidad política: tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo en la remisión de proyectos de ley tienen un rol clave; es necesario un cambio de mentalidad social-político para evaluar correctamente la acción del Estado y el espacio que ocupa.
- Señaló impactos concretos de la legislación: por ejemplo, el Art. 74 de la LUC ha incrementado la cantidad de mujeres privadas de libertad.
- Advirtió sobre la politización de la seguridad, donde el “botín político” genera mayor hipocresía y una respuesta limitada de la sociedad. También evidenció fallas en la implementación de la ley de humanización carcelaria, cuya evaluación y aplicación efectiva fueron insuficientes.

- **CERES:**

- Criticó el empeoramiento de la situación carcelaria, calificándolo como una “hipocresía generalizada profunda”, y señaló que el principal desafío es salir de esta hipocresía y actuar de manera coherente.
- Enfatizó la necesidad de derogar el artículo de la LUC sobre microtráfico, que ha sido cuestionado previamente pero permanece vigente por falta de voluntad política.
- Subrayó la importancia de utilizar datos y estadísticas, recordando estudios sobre reincidencia que muestran que un porcentaje significativo de personas vuelve a delinquir inmediatamente tras ser liberadas, y mencionó microexperiencias piloto positivas.
- Señaló que existe consenso sobre la necesidad de mayor humanidad en las cárceles para reducir la reincidencia, y criticó que, a pesar de ello, no se han implementado medidas efectivas.
- Observó que, en cuanto a las penas, ya no hay consenso político: aunque la evidencia demuestra que las penas más duras no funcionan, las posturas divergentes dificultan la toma de decisiones; enfatizó que el uso de datos en estos debates es crucial para construir consensos y definir acciones concretas.
- Concluyó que el principal desafío consiste en sincerarse y actuar en las áreas donde ya existe consenso, mientras se continúa trabajando para que la evidencia guíe las decisiones en las áreas donde aún no hay acuerdo.

- **NITEP:**

- Enfatizó que existe un descarte progresivo de los casos penales durante el proceso judicial, lo que deja a muchas personas sin atención efectiva. Señaló que la reincidencia alcanza el 70%, mientras que el 30% restante queda en la calle sin acompañamiento, reproduciendo exclusión y vulneración de derechos humanos. Subrayó que este patrón se observa en todo el entramado institucional (INAU, INISA, MIDES, sistema penitenciario), donde las personas ven restringida su autonomía y dignidad.
- Señaló la existencia de una impunidad social que erosiona la confianza cívica y la cohesión social, debido a la ausencia de mecanismos de reparación efectivos para las víctimas. Destacó que el MIDES debe cumplir un rol central en la protección social, actualmente insuficiente o inexistente, especialmente para quienes provienen de contextos de precariedad.

- Planteó la necesidad de una prevención territorial integrada, dado que la violencia se concentra en la periferia y requiere intervenciones sociales y policiales focalizadas. Sin embargo, advirtió que la actuación policial carece de protocolos integrales para la atención de víctimas, recurriendo a traslados compulsivos con garantías insuficientes, amparados en normativas como la Ley de Faltas (19.120) y el artículo 39 de la LUC, generando ambigüedad legal.
- Enfatizó la urgencia de humanizar la respuesta institucional, incorporando protocolos claros de remisión y reinserción. Señaló que tras salir de prisión u otros dispositivos, muchas personas carecen de un plan que les permita reinsertarse, perpetuando la reincidencia. Propuso generar protocolos de reinserción que reconozcan la voluntad de dejar de delinquir y acompañen el retorno a la sociedad.
- Recalcó que el MIDES y el Ministerio del Interior deben tener un rol central en el Plan Nacional de Seguridad Pública, no solo en la acción en la calle sino también en la construcción de rutas efectivas de reinserción, para evitar un abordaje fragmentado que refuerce la criminalización de la pobreza y el desamparo.
- Propuso considerar tres etapas: precarcelaria, carcelaria y postcarcelaria, señalando que la ciudadanía educativa temprana es inexistente, y que actualmente se prioriza la alimentación sobre la formación o producción de capacidades. Criticó los montos de la TUS, que mantienen la indigencia y no constituyen una cuenta social digna, alertando sobre estafas y vulnerabilidades asociadas a su uso.

- **Defensoría Pública:**

- Señaló la necesidad de selectividad en la FGN, aplicando el principio de oportunidad y criterios claros en diferentes lugares para priorizar casos de mayor relevancia y proteger bienes jurídicos importantes.
- Destacó que el tema carcelario es un problema conocido y que los recursos del INR son insuficientes para controlar la situación de reclusión y mejorar la toma de decisiones sobre los reclusos; indicó que tanto el INR como la Defensoría necesitan fortalecimiento.
- Señaló la importancia de pensar en el postcarcelario: el apoyo económico actual (p. ej., 61 pesos para el transporte) es insuficiente, especialmente para personas del interior, lo que puede llevar a delitos menores por necesidad.
- Criticó la eliminación de la suspensión condicional del proceso, argumentando que impide la rehabilitación efectiva de las personas privadas de libertad.

- Concluyó que enviar a personas a prisión preventiva por delitos menores sin acompañamiento adecuado no resuelve el problema y puede incrementar la violencia o la reincidencia al mezclarlas con otras personas con mayor historial delictivo.

- **FGN:**

- Enfatizó que el país carece de una definición común de política criminal, lo que ha impedido orientar de forma clara la acción estatal y coordinar el trabajo entre instituciones. Explicó que esta indefinición se trasladó a la política de persecución penal, donde no existen criterios unificados sobre qué conductas priorizar ni cómo jerarquizar los niveles de persecución, generando fragmentación y esfuerzos desarticulados. Subrayó la necesidad de que las instituciones cuenten con mayor flexibilidad para reorganizar su trabajo en función de objetivos estratégicos definidos, como por ejemplo priorizar la reducción de homicidios.
- Propuso que la FGN ejerza una persecución penal selectiva, priorizando delitos según su gravedad y evitando intentar perseguir todos los delitos por igual, dado que los recursos institucionales son limitados. En este sentido, señaló que la mayoría de los delitos denunciados son hurtos, mientras que las estafas están subregistradas, lo que distorsiona la planificación de prioridades.
- Criticó la contradicción normativa entre la reforma del Código del Proceso Penal, que transformó la práctica fiscal, y el Código Penal, que no ha sido actualizado, generando un desfase estructural. Advirtió que la derogación de normativas que habilitaban medidas alternativas redujo la capacidad del sistema para incidir en la sobrepoblación carcelaria. Planteó la necesidad de aprobar una ley de cupos que limite el número de personas privadas de libertad según la capacidad efectiva del sistema, y de actualizar el marco legal para asegurar coherencia entre la práctica procesal y el régimen penal sustantivo.
- Indicó que, pese a que desde 2017 se cuadruplicaron las fiscalías, los recursos siguen siendo escasos y desigualmente distribuidos, lo que afecta la eficiencia y la carga de trabajo. Agregó que la FGN lleva tres años sin titular, lo que dificulta establecer lineamientos nacionales y coordinar una política criminal coherente.

- Recalcó la importancia de contar con información confiable y actualizada para orientar la toma de decisiones. Destacó que la FGN implementó un sistema propio de gestión y estadísticas que permite conocer con precisión “dónde se está parado”, y que se alimenta parcialmente del Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, con el que tiene cierta interoperabilidad. Sin embargo, advirtió que el intercambio de información entre agencias del Estado sigue siendo limitado, lo que impide construir políticas criminales plenamente basadas en evidencia.
- Valoró el esfuerzo realizado desde 2017 para profesionalizar la gestión de datos y modernizar la labor fiscal. Comparó el antiguo trabajo de las fiscalías, que funcionaban con dictámenes a mano, con los avances en otras jurisdicciones latinoamericanas que ya incorporan inteligencia artificial para optimizar recursos humanos y mejorar la eficiencia. Enfatizó que Uruguay debe avanzar en esa dirección para lograr resultados diferentes y sostenibles.
- Describió el dispositivo de política criminal vigente, donde el fiscal de turno recibe información primaria de la policía para direccionar la investigación y la resolución de los conflictos. Reconoció avances en esta coordinación, aunque señaló que el mecanismo aún requiere fortalecimiento institucional y mayor articulación operativa.
- Subrayó que la reincidencia del 70% genera un efecto de “interés compuesto”, acumulando problemas estructurales que demandan un enfoque integral y estratégico. Explicó que los déficits en prevención, rehabilitación y reinserción refuerzan la sobrecarga del sistema penal y limitan su capacidad transformadora.
- Advirtió que existe un problema estructural en la sociedad uruguaya respecto a la resolución de conflictos, que con frecuencia se produce mediante la violencia, tanto en situaciones cotidianas como de mayor escala. Señaló que esto se debe, en gran parte, a la deuda del sistema judicial con el acceso efectivo a la justicia. Criticó que los diagnósticos y las políticas del sistema tienden a concentrarse en grandes temas o respuestas urgentes, descuidando los conflictos cotidianos, como disputas comerciales simples, que generan tensiones no resueltas y consolidan una cultura de violencia social.

- **FCEP/PIAs:**

- Explicó que el sistema penal adolescente está fragmentado y que la suspensión condicional fue una pérdida significativa, porque ya no se puede evitar el ingreso al sistema penitenciario, generando estigmas de por vida.
- Señaló que la distribución de medidas es desigual: la privación de libertad depende de ciertos departamentos con infraestructura específica, mientras que las medidas no privativas de libertad tienen cobertura limitada y dependen de convenios con INISA o INAU, lo que deja desprotegidos a muchos adolescentes.
- Enfatizó la necesidad de pensar la promoción de derechos de los adolescentes como estrategia de prevención, incluyendo educación, salud, participación comunitaria y resolución de conflictos mediante reparación del daño y justicia restaurativa.
- Indicó que también es crucial atender cómo salen los adolescentes que han estado bajo medidas no privativas de libertad, ya que el sistema actualmente no los protege adecuadamente, y subrayó la importancia de coordinar estas salidas con una mirada amplia de derechos.
- Concluyó que es necesario articular todo el sistema con enfoque en promoción de derechos y coordinación interinstitucional para que la prevención y protección de los adolescentes sea efectiva.

- **IELSUR:**

- Enfatizó que no es necesario que el sistema penal funcione de manera completamente uniforme; consideró natural que existan contradicciones dentro del sistema y advirtió que sería peligroso que los jueces actúen presionados para alinearse con la percepción penal, ya que esto puede impactar significativamente en lugares específicos con un enorme esfuerzo institucional. Subrayó que los mensajes contradictorios de la política y la legislación generan efectos negativos en todo el sistema penal, dificultando que las instituciones logren objetivos de seguridad y justicia basados en evidencia y prácticas racionales.
- Señaló que la mayoría de los recursos fiscales se destinan a delitos menores, lo que sobrecarga a la FGN y distorsiona la justicia penal. Propuso establecer un sistema intermedio entre policía y FGN para filtrar casos y evitar sobrecargar a los fiscales con delitos de poca entidad. Recalcó que las penas cortas son un problema significativo en Uruguay y que existe experiencia internacional (ej. Alemania) que podría guiar soluciones.

- Planteó que la selectividad en la persecución penal debe regirse por criterios racionales compartidos entre los actores del sistema, evitando esfuerzos desproporcionados en hechos de bajo impacto relativo. Propuso que, para problemas como el microtráfico, se busquen soluciones alternativas a la criminalización, incluyendo iluminación, generación de redes comunitarias y fortalecimiento del tejido social, minimizando conductas delictivas sin recurrir únicamente a la persecución penal.
- Criticó la eliminación de la suspensión condicional del proceso, calificándola como un grave error que contribuyó al incremento de la población carcelaria, generando un problema estructural de recursos, presupuesto y seguridad. Destacó que hasta que no se reduzca el número de presos, seguirán construyéndose cárceles, perpetuando un ciclo de sobrepoblación. Planteó la necesidad de establecer una ley de cupos carcelarios que defina las capacidades reales del Estado para gestionar a la población penitenciaria.
- Enfatizó la importancia de respetar los derechos de imputados, acusados y condenados, y advirtió sobre prácticas abusivas en la imposición de penas que posiblemente han violado la Constitución. Criticó la tendencia legislativa de crear grupos de delitos “demonizados” sin incentivos ni mecanismos de reinserción, y señaló que con la legislación y normativa interna actual es imposible reducir efectivamente la delincuencia y la reincidencia, dado que el sistema no ofrece alternativas ni incentivos para la reintegración de las personas privadas de libertad.
- Planteó que la solución requiere priorizar la política criminal, otorgar mayor autonomía a los fiscales y enfocarse en delitos de mayor relevancia, evitando malgastar recursos en casos simbólicos o de menor gravedad.

- **INR:**

- Señaló que falta consenso para virar la dirección de la política criminal, la cual hasta ahora ha tendido a un punitivismo creciente.
- Enfatizó la necesidad de articular en el ámbito del sistema político una discusión basada en evidencia internacional sobre cómo avanzar hacia una política más efectiva y sostenible.
- Indicó que las medidas alternativas han crecido, pero no han reducido proporcionalmente el uso de la prisión, generando un ensanchamiento insustentable de la población bajo control del sistema penal.

- Concluyó que, sin repensar la política criminal y los niveles de encarcelamiento, el sistema continuará atrapado en un ciclo persistente y difícil de sostener institucionalmente.

- **Ministerio del Interior:**

- Señaló que las políticas postpenitenciarias requieren mayor consenso y una oferta programática ampliada, y enfatizó que la política social también constituye un pilar fundamental, más allá de los actores incluidos en el sistema judicial-criminal.
- Subrayó la necesidad de pensar el problema como un sistema integrado, donde la falla de la cárcel no se puede entender aisladamente, sino como consecuencia de eslabones previos que entregan al sistema penitenciario un volumen creciente de personas con penas cada vez más largas.
- Observó que la tendencia a unificar o endurecer penas incrementa la presión sobre el sistema penitenciario y genera consecuencias negativas evidentes, haciendo que la cárcel sea inmanejable y las fallas se produzcan más rápido.
- Resaltó la importancia de definir objetivos claros, determinar los recursos disponibles y medir los resultados alcanzados, señalando que la parte de evaluación aún falla y que mayor exigencia en los datos permitiría decisiones más valientes y efectivas.
- Concluyó que la cárcel no puede salvarse sola y que es necesario abordar todas las fases del sistema, desde la política criminal hasta la social y postpenitenciaria, para que los resultados sean sostenibles y coherentes.

- **OSC Renacer:**

- Señaló que los programas de reinserción social no logran mejorar las condiciones de vida de las personas que egresan del sistema penitenciario. En la mayoría de los casos, solo ofrecen empleos o capacitaciones de baja calificación, lo que impide avanzar socialmente y perpetúa la pobreza y la exclusión.
- Observó que las políticas públicas se concentran en castigar la infracción penal en lugar de abordar las causas que la generan, como la falta de acceso a educación, empleo o vivienda. Advirtió que las personas deben demostrar su situación de pobreza para acceder a ayuda estatal, lo que aumenta su vulnerabilidad y refuerza la desigualdad.

- Criticó las carencias en atención de salud mental, donde las largas listas de espera implican que las necesidades críticas no sean atendidas a tiempo.
- Planteó que la política actual no resuelve los problemas estructurales, sino que reproduce ciclos de vulnerabilidad y reincidencia, y que es necesario repensar la intervención desde una perspectiva más integral y preventiva.

- **Poder Judicial:**

- Señaló que la reincidencia constituye un problema estructural del sistema penal, al operar como una categoría de estigmatización que agrava la respuesta judicial y alimenta la sobrepoblación carcelaria. Propuso eliminar la categoría legal de la reincidencia, por entender que impone un tratamiento más punitivo a quienes reinciden respecto de los primarios, y sostuvo que su eliminación permitiría reducir la población carcelaria y avanzar hacia un sistema penal más equitativo y menos estigmatizante.
- Criticó que la política criminal tiende al mayor punitivismo, lo que se refleja en normativas recientes como la eliminación de la suspensión condicional del proceso y la creación de figuras delictivas agravadas para amenazas a fiscales o jueces. Esto obliga a fiscales y policías a perseguir múltiples delitos sin priorización clara, fragmentando los recursos institucionales.
- Advirtió que perseguir delitos y aplicar la pena se ha considerado un fin en sí mismo, cuando no resuelve los problemas sociales que deberían abordarse en otros ámbitos. Señaló que la impunidad existe, pero otros problemas, como la reincidencia y la sobrepoblación, son más urgentes y estratégicamente relevantes. Propuso abordar la impunidad priorizando homicidios, violencia de género y delitos graves, mientras que delitos menores deberían recibir menor atención para no saturar el sistema.
- Señaló la fragmentación institucional como un problema estructural: las personas pasan por distintos sistemas y dispositivos (ANEP, INAU, centros de adicciones, cárceles) que los atienden “a su interna”, sin coordinación ni comunicación, impidiendo un seguimiento integral. Propuso que compartir datos, experiencias y aprendizajes entre instituciones podría reducir ingresos al circuito penal y mejorar la prevención.

- Observó que la policía no debería encargarse simultáneamente de la persecución penal y del sistema carcelario. Subrayó que la independencia del Poder Judicial para decidir caso a caso es fundamental y no debería verse afectada por presiones externas.
- Destacó que la altísima reincidencia refleja un imaginario social extremadamente conservador que influye en las sensibilidades de los operadores jurídicos y en la forma en que se percibe y aplica la justicia. Criticó la construcción del “otro” en la sociedad, en la que ciertos grupos (delincuentes, migrantes, personas en situación de calle) son etiquetados y excluidos, lo que impacta en la aplicación de la justicia.
- Señaló que el sistema no está preparado para brindar respuestas diferenciales y efectivas a grupos vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, LGBTQ+, migrantes y personas en situación de calle. Planteó que los problemas sociales que originan la criminalidad no se resuelven solo con cárcel y que la estructura institucional puede generar más conflictos que soluciones.
- Subrayó la necesidad de que el sistema político entienda y actúe sobre la evidencia empírica disponible. Advirtió que, aunque exista consenso técnico (academia, sociedad civil, operadores), predomina una mediocridad política que impide tomar decisiones transformadoras. Reclamó mayor presión y responsabilidad hacia la clase política para implementar pasos concretos y sostenibles.
- Señaló que la reacción punitiva a episodios de conmoción social, como conductas juveniles que generan impacto mediático, no resuelve los problemas y puede llevar a respuestas represivas exageradas. Ejemplificó que adolescentes que cometen hurtos menores en contextos de conmoción mediática terminan privados de libertad, lo que refleja un enfoque más conservador que preventivo o de reinserción.
- Planteó la necesidad de reformas estructurales basadas en evidencia, advirtiendo que seguir invirtiendo únicamente en cárceles podría derivar en el cierre de escuelas, hospitales y otros servicios esenciales. Propuso que un acuerdo político e interinstitucional debería definir objetivos alcanzables y priorizar los fenómenos criminales que requieren atención más intensa.

- **SIEMBRA:**

- Destacó la importancia del rol de la sociedad civil dentro y fuera de las cárceles, tanto para apoyar a las personas privadas de libertad como a sus familias.

- Señaló que los recursos actualmente se utilizan de manera poco inteligente y poco viable; invertir grandes sumas dentro de cárceles en estas condiciones no es sostenible, ético ni efectivo. Propuso que la inversión de recursos sea más humana, sustentable y estratégica, involucrando a la sociedad civil y a las familias para acompañar procesos de reinserción y reducir los costos del sistema.

3.4 Pausa para café (11:00 - 11:15)

Espacio breve de descanso que permitió a los participantes recuperar energía y mantener intercambios informales.

3.5 Pregunta disparadora 2 (11:15 - 12:45)

¿Dónde hay más oportunidades de intervenir para lograr resultados? ¿Qué iniciativas se han intentado antes y qué aprendimos de ellas?

Aportes generales

- Varias instituciones coincidieron en que es necesario fortalecer la coordinación interinstitucional entre INR, FGN, Poder Judicial, Defensoría Pública, UTU y MIDES, dado que muchas iniciativas previas fracasaron por operar de forma aislada. El aprendizaje central fue que sin continuidad institucional ni presupuestos transversales, los programas dependen del impulso personal o coyuntural de ciertos actores y se desarticulan ante cambios de gestión.
- La Defensoría Pública y la FGN subrayaron la oportunidad de intervenir en la fase previa a la condena, ampliando los mecanismos de mediación penal, justicia restaurativa y acuerdos reparatorios. Estas herramientas reducen la reincidencia y evitan el ingreso innecesario al sistema carcelario, siempre que cuenten con respaldo normativo y equipos formados para implementarlas.
- El Poder Judicial señaló la necesidad de generar una justicia más próxima al territorio, que permita respuestas situacionales ante conflictos comunitarios y familiares. Las experiencias de justicia restaurativa en Canelones y Rivera fueron mencionadas como ejemplos que demuestran resultados positivos cuando se integran actores locales, OSC y equipos técnicos del Estado.

- NITEP, ASFAVIDE y Siembra destacaron que existen grandes oportunidades en la prevención secundaria, enfocada en procesos de reinserción y acompañamiento pospenitenciario. El proyecto Camino a Casa (NITEP) fue señalado como una práctica innovadora de vivienda de transición que permite sostener procesos de reintegración y evitar la reincidencia.
- Varias instituciones insistieron en que las políticas deben articular respuestas en tres tiempos: corto, mediano y largo plazo, priorizando el impacto inmediato sin abandonar la construcción estructural. El Ministerio del Interior señaló que los resultados a corto plazo se logran mediante acciones de prevención situacional y control de gestión penitenciaria, mientras que las OSC enfatizaron la necesidad de mantener estrategias sociales sostenidas, incluso cuando los efectos sean de largo alcance.
- Desde la DNE y el INR se resaltó el valor de la educación como eje articulador de la prevención. Se aprendió que los programas que incluyen continuidad educativa dentro y fuera del sistema penitenciario tienen efectos sostenibles sobre la reincidencia, mientras que las experiencias discontinuas, dependientes de convenios temporales o donaciones, pierden impacto.
- Se advirtió que las oportunidades de mejora no dependen solo de nuevos programas, sino de corregir la falta de gobernanza y planificación estratégica. Varias instituciones coincidieron en que la ausencia de evaluación de resultados ha impedido aprender de las experiencias pasadas. El desafío es consolidar una política criminal basada en evidencia, con metas, indicadores y presupuestos asignados a mediano y largo plazo.
- CERES y las OSC coincidieron en que es necesario fortalecer la recolección y el cruce de datos entre instituciones, para poder evaluar trayectorias delictivas, reincidencia y resultados de programas. Sin información sistematizada, las intervenciones se diseñan a ciegas y los recursos se asignan de forma ineficiente.
- CAMBADU y las OSC destacaron el rol del empleo como herramienta clave de reinserción. Las experiencias de inserción laboral mediante convenios con el INR mostraron que, con acompañamiento técnico y sensibilización del empleador, se pueden generar segundas oportunidades reales. El aprendizaje fue que estos programas requieren apoyo fiscal y técnico sostenido, no solo voluntad empresarial.

- Se coincidió en que las oportunidades más prometedoras surgen cuando el Estado y la sociedad civil comparten la responsabilidad: fortalecer la educación y el empleo dentro del sistema penal, crear mecanismos de justicia restaurativa, sostener la vivienda de transición, profesionalizar la recolección de datos y asegurar la continuidad presupuestal. Sin estas condiciones estructurales, toda política de justicia o reinserción corre el riesgo de quedar en intervenciones aisladas.

3.6 Cierre y próximos pasos (12:45 – 13:00)

El moderador agradeció la participación y el compromiso de los actores presentes, destacando que los aportes recabados serán sistematizados. A su vez indicó que en la semana del 13 de octubre y del 20 de octubre se realizarán mesas temáticas en el marco del Cuarto Encuentro por Seguridad.

4. Anexos

4.1 Lista de participantes

Participantes

Institución	Nombre del Representante
Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) - Ministerio del Interior	Diego Sanjurjo
Asociación Civil El Abrojo	Valeria Caggiano
Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (ASFAVIDE)	María Luisa Martinez
Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU)	Daniel Fernández
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES)	Daniel Supervielle Ignacio Munyo
Colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP)	Ken Chang
Defensoría Pública	Lucía Long
Dirección Nacional de Educación (DNE) - Ministerio de Educación y Cultura	Grabriela Rak
Fiscalía General de la Nación (FGN)	Patricia Marquisa Sebastián Robles

Fundación Centro de Educación Popular (FCEP)	Paula Aintablian
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)	Diego Camaño
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) - Ministerio del Interior	Ana Juanche
Ministerio del Interior	Ana Vigna Fabio Quevedo Brito Robert Taroco Selva Gomez
OSC Renacer	Eddie Reina
Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs)	Paula Aintablian
Poder Judicial	Diego González Juan Pablo Novella Heilmann
Siembra	Nicolas Iglesias

Consejo Internacional de Observación y Cooperación

Institución	Nombre del Representante
Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)	Daniel Castro
Organización de los Estados Americanos (OEA)	Nathalie Castello
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	Mariela Solari
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)	Mariana Kiefer

Organización

Institución	Nombre del Representante
Ministerio del Interior	Emiliano Rojido

Ministerio del Interior	Guzmán Pérez
Ministerio del Interior	Lucia Pintos
Ministerio del Interior	Sofía Lopes Apesteguy

4.2 Registro fotográfico





**Presidencia
Uruguay**



**Ministerio
del Interior**